

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes y objetivos.

En el Organismo Legislativo se ha abierto a discusión en distintos foros y oportunidades, en los más recientes años, propuestas para reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, esfuerzos que no lograron consolidarse por razones diversas.

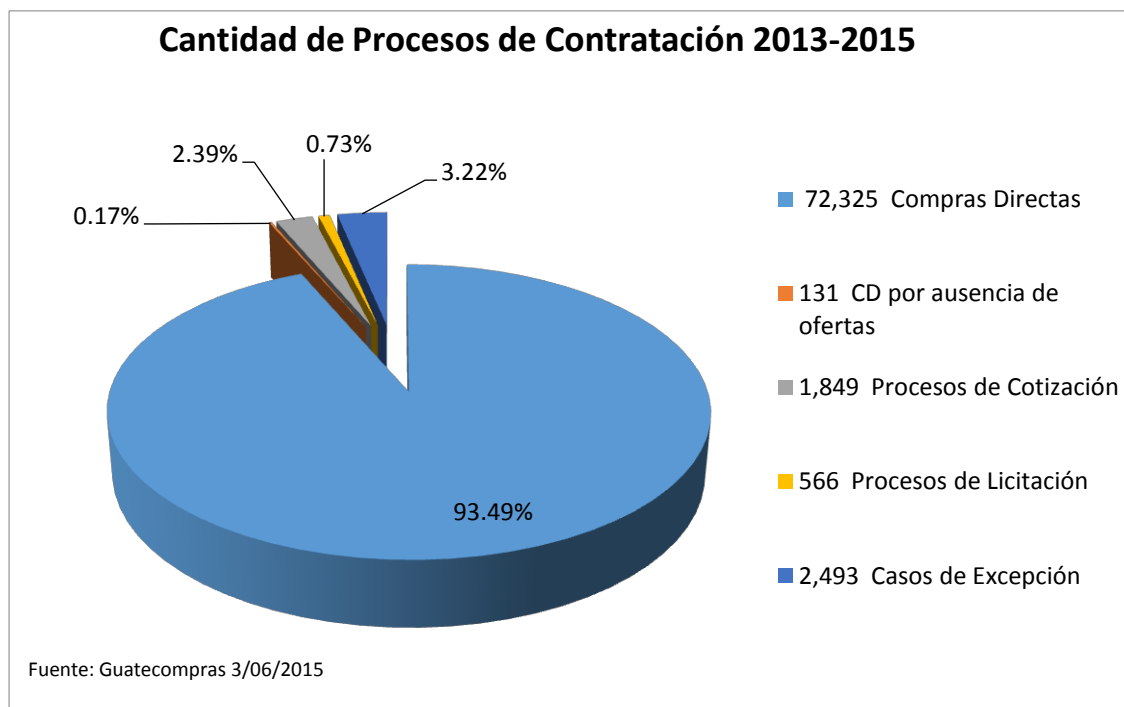
A raíz de la coyuntura política que atraviesa el país en que trascendieron múltiples hechos de corrupción que se han judicializado por el Ministerio Público, la necesidad de una ley que limite la discrecionalidad de la función pública en la administración de los recursos del erario, fue más sentida y creó un ambiente propicio para acometer nuevamente el esfuerzo, esta vez, con mayor participación de la sociedad civil y de las instituciones públicas y no gubernamentales con *expertise* en administración financiera, en gasto público y, sobre todo en el ejercicio de controles.

Siendo el Presupuesto de ingresos y egresos del Estado de cada año un instrumento de desarrollo, constituye el desiderátum de gasto público que se aprovechen los fondos del erario en los programas de gobierno y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado a fin de que pueda cumplir su fin supremo que es el bien común.

La Ley de contrataciones del Estado del año 1992 que sustituyó y derogó expresamente el Decreto Número 35-80 del Congreso de la República, Ley de Compras y Contrataciones, ha dejado de cumplir su cometido porque fue diseñada para contratos de obra pública y se utiliza para todo tipo de adquisiciones, por lo que muchas de sus normas han dejado de ser útiles, en su conjunto para los fines de regular el gasto público.

Todo gasto requiere de un procedimiento para su ejecución y la ley regula los distintos mecanismos según montos y según el tipo de bien o servicio que se adquiere. Lo complicado que puede resultar

la aplicación de algunos procedimientos ha llevado a buscar fórmulas que permitan evadirlos y precisamente esa permisibilidad ha abierto los canales de la corrupción, que es lo que ahora se busca restringir razonablemente sin que se creen diques a la ejecución del gasto público. Las compras por excepción o la utilización de mecanismos extraordinarios no diseñados para la institucionalidad estatal, tal como los fideicomisos, son muestra de lo aseverado aquí. Por ello, corresponde velar porque todo procedimiento de ejecución presupuestaria esté regulado por la ley y, sin crear obstáculos que den lugar a ingobernabilidad, establecer reglas claras y transparentes a fin de que funcione el modelo de frenos y contrapesos y los entes de control puedan cumplir sus atribuciones y también se facilite la auditoría social que, en última instancia, resulta ser garantía de que el presupuesto del Estado no será malgastado y sus recursos se orienten a programas de gobierno y a sufragar satisfactoriamente los servicios públicos.



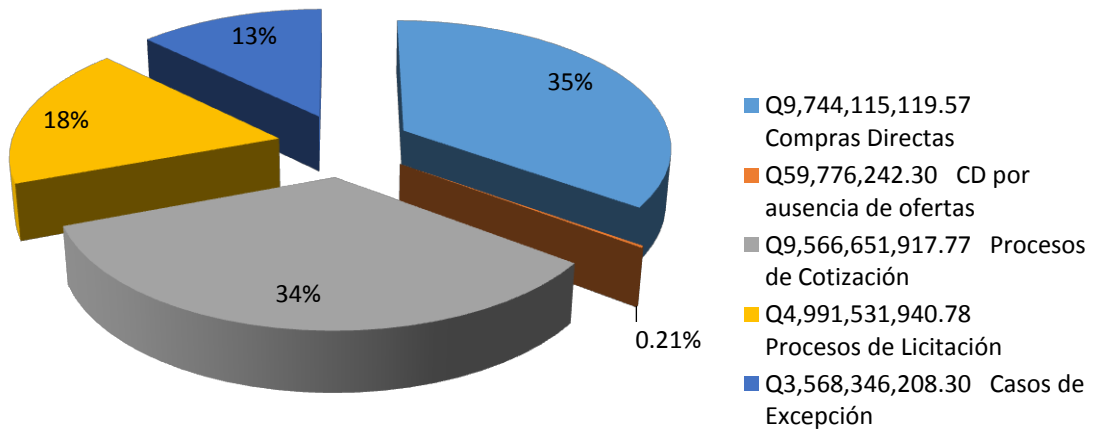
De esa cuenta, se hace necesario un instrumento legal que, por una parte constituye herramienta útil y ágil para ejecutar el presupuesto del Estado y, por la otra, que tenga las suficientes garantías de que esa ejecución será mediante procedimientos transparentes y sujetos a la auditoría institucional y social a fin que la ciudadanía pueda tener confianza en que los recursos del Estado, captados básicamente de los impuestos, serán bien administrados.

Así, se partió de algunos criterios para favorecer la ejecución presupuestaria con probidad y de manera oportuna para que el Estado que adquiere y los proveedores puedan hacer transacciones que se ajusten a las necesidades en cuanto a precio favorable y calidad de bienes, obras y servicios y pronta recuperación del costo monetario de lo entregado.

Se trata, no de poner muros a la ejecución del presupuesto porque al final se terminaría obstaculizando el gasto público, sino de ofrecer herramientas que a la vez que brindan transparencia le imprimen dinámica a la administración pública.

La sociedad guatemalteca ha planteado sus demandas y reclama que la institucionalidad estatal se ponga en funcionamiento para ejecutar los programas de gobierno y servicios públicos que benefician a la población. El Congreso de la República debe corresponder con este esfuerzo que ha sido de construcción colectiva con participación social y, por tanto, tiene el reconocimiento no solo de la sociedad civil sino de especialistas en la materia en la preparación de este proyecto que indudablemente revela las necesidades legislativas actuales y requerirá de esfuerzos normativos adicionales para que el ordenamiento jurídico pueda contar con las pautas reguladoras de la función pública en cuanto a la ejecución presupuestaria y realización de programas y proyectos.

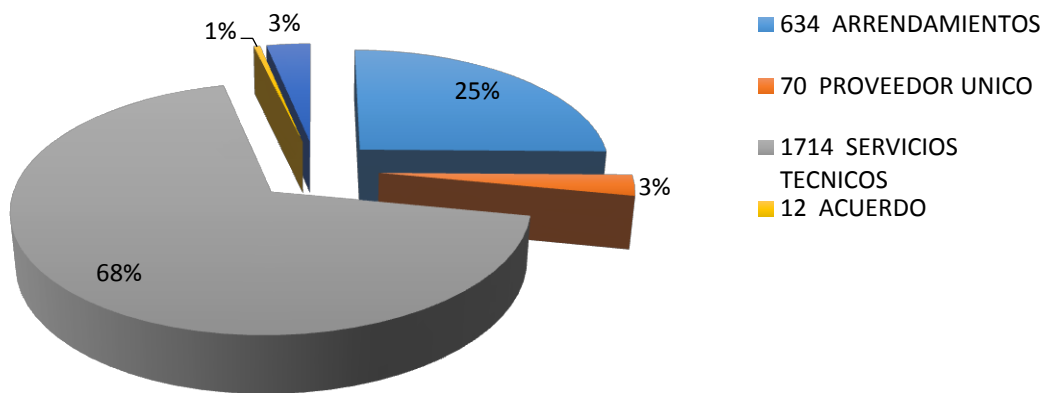
Monto de los Procesos de Contratación 2013-2015



Fuente: Guatecompras 3/06/2015

Es relevante en el proyecto la eliminación de múltiples procesos de excepción en las adquisiciones del Estado que, en los casos de utilidad se propone convertir en modalidades de contratación toda vez que el propósito, como quedó expresado, es ofrecer a las entidades estatales procedimientos ágiles pero transparentes y de discrecionalidad limitada.

EVENTOS POR EXCEPCIÓN 2013 - 2015

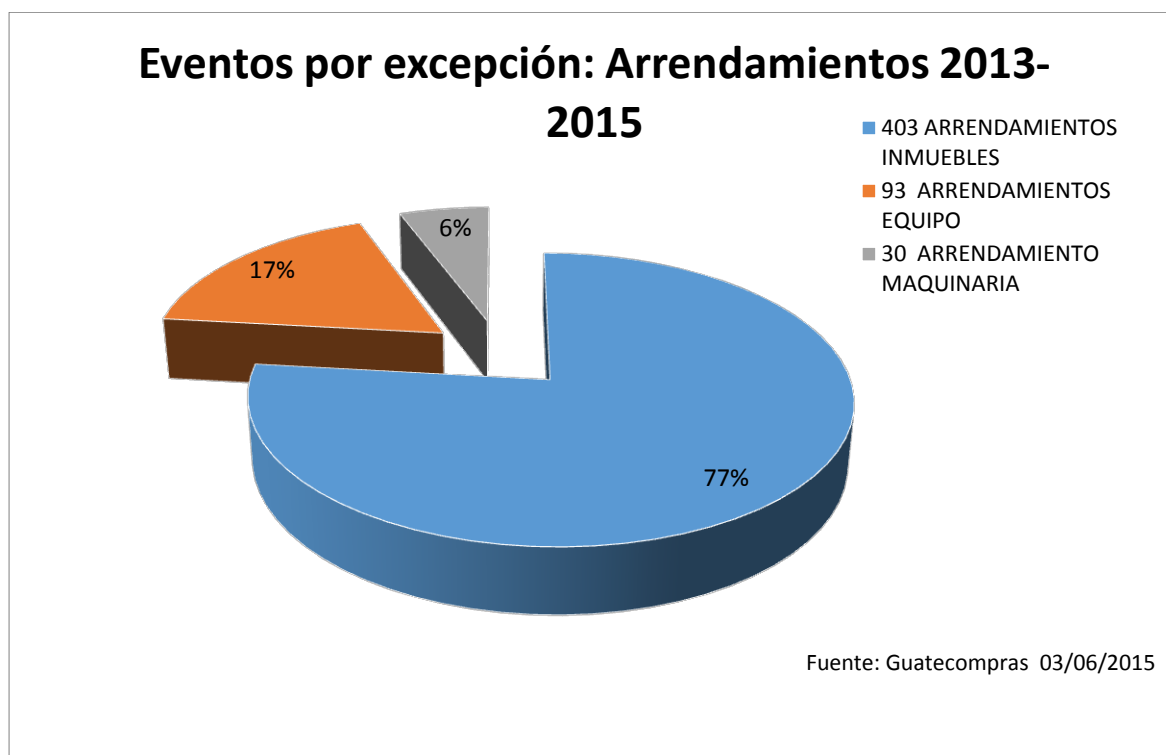


Fuente: Guatecompras 3/06/2015

El 68% de los eventos por excepción son servicios técnicos, concepto que es ambiguo y que se utiliza para evadir el régimen de cotización y licitación, por lo que se elimina esta excepción aunque no debe inaplicarse para la contratación de inteligencia como un bien intangible, para el cual se podrá valer el principio de *doble sobre* que es el estándar mundial para esta contratación. Lo común ha sido que se hacen prácticas colusorias mediante invitación restringida, con lo que se restringe la participación de oferentes. En todo caso, en el proyecto se dejan los aspectos normativos específicos, básicamente procedimentales, para que sean desarrollados en el reglamento de la ley.

El otro concepto lo constituyen los arrendamientos que representan un 25% de las contrataciones por excepción. En este rubro debe comprenderse que en algunos casos es perfectamente justificable, pero no debe permitirse que sea utilizada la figura para disfrazar compras que, de otra manera tendrían que seguir un proceso de cotización o licitación. Se hace preciso regular los arrendamientos

a fin de cerrar compuertas a la discrecionalidad y ofrecer condiciones que, sin impedirlos, establezcan criterios apegados a la integridad en la función pública sin márgenes a las contrataciones irregulares, anómalas o, incluso, ilegales.



El contenido del proyecto:

Se propone reformar el artículo 1 para ampliar la definición de sujetos obligados y objeto de la ley. Con esta precisión del ámbito material y personal de la Ley de Contrataciones del Estado, se abarca prácticamente a cualquier persona individual o jurídica que administre o ejecute fondos públicos, incluyendo los fideicomisos constituidos con fondos públicos, con el propósito de hacer congruente esta ley con la Ley Orgánica del Presupuesto.

El artículo 4 Bis crea formalmente GUATECOMPRAS que ahora tendrá reconocimiento legal y no solo una referencia ocasional. Se precisa que es un sistema de adquisiciones y no solo un portal de información, por lo que el mismo será la herramienta por esencia a utilizar por los entes ejecutores de fondos públicos.

Se fortalece la institucionalidad del sistema de adquisiciones mediante la creación del Registro General de Adquisiciones del Estado que consistirá en varios libros, siendo ellos, como mínimo, registro de precalificados de contratistas; registro de precalificados de consultores; registro de proveedores; y, registro de contratos. El registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado podrá habilitar los libros que considere convenientes. Asimismo se establecen las calidades que debe reunir el registrador y las causales de remoción [artículos 71al 75].

Los precios de referencia o precios promedio a cargo del Instituto Nacional de Estadística y deberán ser publicados mensualmente en el portal de GUATECOMPRAS. [artículo 8].

En el artículo 9 se define a la autoridad superior en cada ámbito de la administración pública y se faculta a la autoridad superior de cada entidad para designar a los funcionarios o servidores públicos de la misma que fungirán como autoridad administrativa superior para efectos de la aplicación de la ley.

Se regula en forma ordenada y sistemática lo relativo a juntas de cotización, licitación y calificación (para contratos abiertos), procediéndose primero a su definición y funciones, integración e idoneidad, entendiéndose ésta como el conjunto de criterios de conocimiento en aspectos jurídicos, financieros y técnicos en la materia de que se trate el bien, servicio u obra que se pretende contratar. La idoneidad en estos tres aspectos es para cada junta y ninguno de sus miembros podrá carecer de credenciales en estas materias de tal manera que al menos en uno deba estar calificado para aportar idoneidad a la junta. Las juntas serán nombradas por la autoridad administrativa superior del ente que vaya a adquirir. Se regula lo referente a impedimentos, excusas y recusaciones con el criterio de no obstaculizar la integración de las juntas pero garantizando su idoneidad [artículos 10 al 14].

La institucionalidad del órgano responsable de facilitar los procesos de contrataciones y adquisiciones recaerá en la Dirección General de Adquisiciones del Estado a la cual se le asignan atribuciones específicas y se le dota de recursos para su buen desempeño. [artículos 15 y 16]

El proyecto introduce la figura de “oferta electrónica” que favorece la celeridad y la transparencia toda vez que se prescinde del “papeleo” y se publica la oferta en GUATECOMPRAS. [artículo 24 Bis]. Asimismo, los formularios y documentos para cotización serán aprobados por la autoridad administrativa superior, con lo que se hace congruente la norma con lo previsto para la licitación [artículo 40].

Se reforma el artículo 41 con el fin de cerrar las posibilidades actuales de fingir un proceso de cotización con bases que contengan requisitos extremos que no despiertan el interés de ningún oferente, razón por la cual se prescinde de la cotización. La idea es que no se pueda prescindir con nuevas bases que bien podrían ser ajustadas ad hoc para determinado proveedor.

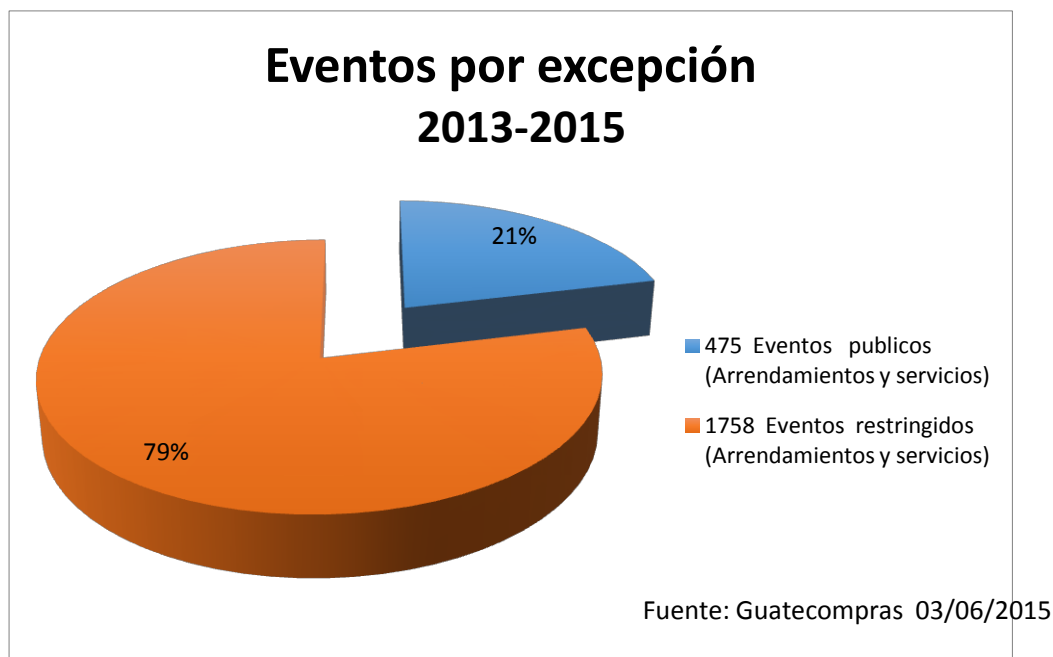
El nombre del capítulo III que se refiere a excepciones, cambió para denominarse “MODALIDADES ESPECÍFICAS DE ADQUISICIONES DEL ESTADO Y EXCEPCIONES”. Que incluye reformas a los artículos 43 y 44 y adición de otros artículos que contienen las modalidades que habrán dejado de ser excepciones pero que seguirán siendo útiles bajo otra regulación.

De esa cuenta, se formula un nuevo contenido para el artículo 43, compra de baja cuantía, compra directa, adquisición con proveedor único, y arrendamientos de bienes muebles a fin de mejorar niveles de transparencia (GUATECOMPRAS) y establecer plazos razonables que la hagan ágil.

En cuanto a las excepciones, se reforma el artículo 44 a fin de limitar las excepciones a lo estrictamente necesario, quedando seis hipótesis normativas en que es permisible este procedimiento excepcional, tales como lo prevé la Ley de Orden Público en los casos en que el Ejecutivo declare Estado de Excepción; facilitar al sector salud la adquisición de vacunas, medicamentos antiretrovirales, métodos de planificación familiar, fármacos, micronutrientes, suministros quirúrgicos y de laboratorio, compras que podrán ampararse en convenios internacionales y acuerdos

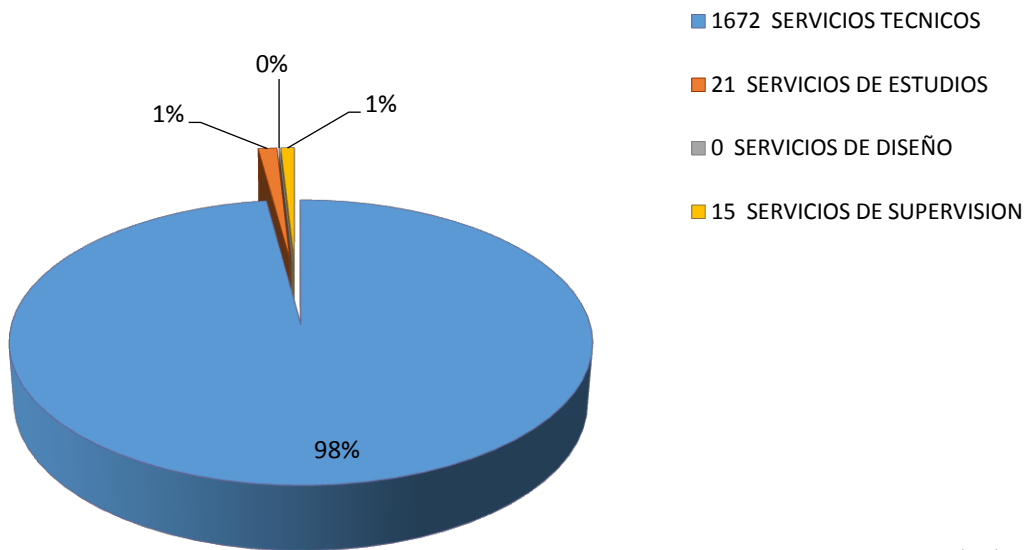
regionales; las compras que el Estado necesite hacer en el extranjero, las compras que requiere el Banco de Guatemala para la acuñación de moneda metálica, equipos de impresión, formas de billete de banco y títulos valores, así como metales preciosos.

También se conserva la excepción para la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales y al Tribunal Supremo Electoral para adquisiciones directas de bienes y servicios vinculados a la realización de eventos electorales durante el ejercicio fiscal en que estos procesos se lleven a cabo.



[La contratación de Servicios o arrendamientos, se hacen por eventos restringidos y no por evento público, la ley da las dos opciones, pero en un 79% se opta por hacerlo como evento restringidos.]

Eventos por excepción : Servicios 2013- 2015



Fuente: Guatecompras 03/06/2015

[Bajo el concepto de servicios técnicos, se contrata el 98% de los servicios de todo tipo, disfrazados como servicios técnicos, para evitar la licitación.]

La modalidad de contrato abierto es reformulada a fin de que no se convierta en camisa de fuerza para que la institucionalidad estatal pueda hacer adquisiciones más convenientes, a la vez que obliga su transparencia a través del sistema GUATECOMPRAS.

La prórroga contractual se permitirá por una sola vez y se obliga que al aprobarse la misma se inicie de inmediato el procedimiento para un nuevo contrato mediante cualesquiera de los regímenes competitivos establecidos.

La subasta electrónica inversa se introduce como modalidad que hasta ahora no existe en la ley de contrataciones para que los proveedores puedan hacer sus ofertas y se pueda adjudicar la compra a quien presente la postura más baja. Tiene como techo el precio de referencia proporcionado por el

INE. Las adquisiciones serán más prácticas y las condiciones favorables para el sector público [artículo 54 Bis].

Asimismo se regula que el pago a proveedores debe priorizarse por antigüedad de la deuda bajo el principio de primero en entrar, primero en salir [artículo 62].

Se fijan formalidades para establecimiento de garantías, en la modalidad de fianzas, hipotecas o prendas, a fin de que sea más favorable para el Estado y se tenga la certeza de que los documentos que las amparan sean auténticos. Se llevará registro de fianzas en GUATECOMPRAS [artículo 69].

En el artículo 80 se precisan las prohibiciones para celebrar contratos con el Estado y se introducen algunas que permitirán impedir actos de compromiso político, tal como la literal i) que prohíbe contratar a quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato anterior al período presidencial o legislatura en curso. En general se refiere a impedir los conflictos de intereses que pueden devenir en actos de corrupción.

Finalmente se reforma el artículo 81 para regular de mejor manera la norma que prohíbe el fraccionamiento de las compras, definiéndolo como el acto de incurrir en hacer compras directas una vez el producto o servicio adquirido ha superado el monto de la compra directa y evade la cotización, o cuando la compra de este producto o servicio supere al monto de la cotización.

Por último se introducen disposiciones transitorias para hacer viable la aplicación de la reforma y permitir que las instituciones respectivas creen las condiciones para ello, como por ejemplo la implementación del sistema para la subasta electrónica inversa, y la vigencia de la ley será en forma diferida precisamente para que la nueva normativa se aplique en forma ordenada.

Del proceso de construcción de la iniciativa.

La dinámica del esfuerzo colectivo conjunto entre Congreso de la República, instituciones públicas y sociedad civil tuvo participación de los diputados Nineth Montenegro, como Presidenta de la mesa, y los diputados Álvaro González Ricci, Vicepresidente y Álvaro Trujillo Baldizón, como Secretario.

Las entidades estatales que aportaron fueron: Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Contraloría General de Cuentas, Instituto Nacional de Estadística, Tribunal Supremo Electoral y Universidad de San Carlos de Guatemala. Por parte de organizaciones civiles: Acción Ciudadana –AC-, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-, Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales –ASIES-, Fundación para el Desarrollo –FUNDESA-, Fundación 20-20, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN-, con la participación de Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia –LEGIS- que, a solicitud de la Presidenta, fungió como Secretaría Técnica de la mesa.

La mesa técnica con su fase de audiencias públicas, conoció las distintas dimensiones ofrecidas por los ponentes respecto de los problemas que afronta el Estado para la ejecución de presupuesto, mediante compras y contrataciones y las debilidades legales que se vuelven permisivas para actos discrecionales que terminan en repudiables hechos de corrupción. La Secretaría Técnica tomó nota y, con la participación activa de los expertos de las organizaciones civiles que dieron su aporte desinteresado, surgió el proyecto que se describe *supra*.

Actividades realizadas:

Audiencias Públicas: Mediante un comunicado de prensa, difundido en tres medios escritos de amplia circulación se convocó a las personas y organizaciones que tuvieran interés en presentar propuestas concretas de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, informando que serían escuchados por los integrantes de la mesa de trabajo en audiencia pública; durante el mes de junio de 2015 se celebraron seis audiencias públicas, en las que se escuchó treinta y tres ponencias, expuestas por ciudadanos que presentaron en nombre propio y por representantes de organizaciones civiles, gremiales, comerciales, organizaciones internacionales, Naciones Unidas y ministerios de Estado.

En la fase de audiencias públicas se recibieron ponencias, opiniones y propuestas de:

[9 de Junio de 2015]:

1. Señor Julio Imeri, asesor de la bancada UNE: presentó la iniciativa de ley 4881.

2. Señora Cecilia del Puerto, Banco Interamericano de Desarrollo: presentó diagnóstico realizado para el Ministerio de Finanzas Públicas con el auspicio del BI y del Banco Mundial.
3. Señor Saúl Figueroa, Ministerio de Finanzas Públicas.

[11 de Junio de 2015]:

1. Señor Pablo Hurtado, ASIES.
2. Señor Rodolfo Ruano, ciudadano en nombre propio.
3. Señor Guillermo Méndez, Instituto de Servicios a la Nación.
4. Señor Edgar Contreras, Asociación Guatemalteca de Investigadores de Presupuesto AGIP.

[16 de junio de 2015]:

1. Señor Luis Moya, Hospital General San Juan de Dios.
2. Señor Jorge Elizondo, ciudadano en nombre propio.
3. Señora Rebeca Guízar, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva.
4. Señor Claudio Gaetani, Fundación 1 por 1.
5. Señora Sonia Gutiérrez, asesora de la bancada WINAQ.
6. Señor Aníbal Reyes, ciudadano en nombre propio.

[18 de Junio de 2015]:

1. Señor Alfredo García, Asociación de Constituyentes.
2. Señor Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas.
3. Señor Mario Zúñiga, Sindicato de Médicos del IGSS.
4. Señor Arturo Letona, Colegio de Farmacéuticos.
5. Señor Leonel Rodas, Gremial de Farmacéuticos.
6. Señor Diego Marroquín, Movimiento Cívico Nacional.

[23 de Junio de 2015]:

1. Señor Gustavo Porras, Consejo Económico Social de Guatemala.
2. Señor Raúl Monterroso, representante de la Cámara de Finanzas del CACIF.
3. Señor Eduardo Tercero, representante UNOPS.
4. Señor Ricardo Barrientos, representante ICEFI.
5. Señor Marvin Flores, representante de Acción Ciudadana.

6. Señor Jorge Jiménez, representante Fundación 2020.

[25 de Junio de 2015]:

1. Señor Héctor Zenteno, representante Cámara de la Industria de Guatemala.
2. Señor Alex Huschke, representante JAEGER, productos farmacéuticos.
3. Señora Astrid Beltetón, FLACSO.
4. Señor Diputado Álvaro González Ricci, bancada CREO.
5. Señor Manuel Ángel Castillo, Colegio de Ingenieros.
6. Señor Luis Mojica, ciudadano en nombre propio.
7. Señor Juan Pablo Verdugo, representante AGIMACI-CECOMS.
8. Señor Aldo Ordóñez, Cámara de Comercio.

Posterior a la realización de las audiencias públicas la Secretaría Técnica elaboró una lista de los temas que fueron expuestos en las diferentes ponencias, estableciendo coincidencias en las demandas de los ponentes, se analizó cuáles normas correspondían a los temas relacionados a las peticiones de la ciudadanía y con base en ello se procesó una matriz en la que se enlistó por tema, ponente, norma vigente y propuesta de reforma. Esta matriz fue presentada a los tres diputados integrantes de la mesa de trabajo, quienes decidieron presentar el borrador de proyecto de decreto, elaborado por la Secretaría Técnica con base en la información obtenida de las diferentes audiencias públicas, para su discusión y observaciones.

El nueve de julio, se realizó la presentación del primer borrador en un hotel de la zona uno capitalina, llegando los integrantes de la mesa técnica al consenso de realizar un análisis exhaustivo del proyecto de decreto y continuar las reuniones hasta obtener un producto para presentar al Congreso de la República.

La mesa técnica, integrada por representantes de la sociedad civil, Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Salud, asesores del Congreso de la República y presidida por los tres diputados integrantes de la mesa de trabajo, se reunió para la discusión del primer borrador de proyecto de decreto en diez sesiones, en las que se discutió artículo por artículo,

se tomó nota de cada uno de los consensos y se elaboró una nueva versión que incluye la exposición de motivos.

La segunda fase, de mesas técnicas, concluyó con una iniciativa de ley con exposición de motivos que se presenta en el siguiente proyecto:

DIPUTADOS PONENTES:

**NINETH MONTENEGRO C.
PRESIDENTA**

**ALVARO GONZALEZ R.
VICEPRESIDENTE**

**ALVARO TRUJILLO B.
SECRETARIO**

DECRETO NÚMERO _____
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, Ley de Contrataciones del Estado, debe ser el único cuerpo legal que rija las compras y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios que realicen las entidades estatales y todas aquellas que ejecuten fondos del erario público, teniendo como prioridad la calidad del gasto público.

CONSIDERANDO:

Que es necesario fortalecer los procedimientos en las modalidades de compras y contrataciones como la cotización y licitación, desde la elaboración de bases técnicas hasta la aprobación de contratos, evitando el conflicto de interés; así como, restringir las compras mediante las modalidades de excepción y compra directa que en los últimos años ha sido la regla.

CONSIDERANDO:

Que es necesario agilizar, dinamizar las compras y contrataciones del Estado, dentro del marco de la ley, evitando la discrecionalidad y promoviendo la transparencia y eficiencia en la ejecución del gasto público.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

Las siguientes,

REFORMAS A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Artículo 1. Se reforma el artículo 1, el cual queda así:

“**Artículo 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación.** Esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen:

- a) Los Organismos del Estado;
- b) Las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades;

- c) Las entidades o empresas, cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado;
- d) Las Organizaciones No Gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro, que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Se exceptúan las Organizaciones de Padres de Familia -OPF-, Comités y Consejos Educativos y Juntas Escolares del Ministerio de Educación, para los programas de apoyo escolar; y las subvenciones y subsidios otorgadas a los centros educativos privados gratuitos;
- e) Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado, respecto a los mismos;
- f) Los Fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales;

- g) Las demás instituciones que conforman el sector público;

Las entidades anteriores se sujetan a la presente ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia, en lo relativo al uso de fondos públicos. El reglamento establecerá los procedimientos aplicables para el caso de las entidades incluidas en las literales d), e) y f).

Las adquisiciones cuya fuente de financiamiento sean recursos del crédito público, incluyendo la deuda pública de mediano o largo plazo, o fondos de contrapartida de donaciones que hagan personas, entidades, asociaciones u otros Estados a favor del Estado de Guatemala, sus dependencias, instituciones o municipalidades, se regirán por esta ley.

Sin embargo, en el caso de los contratos, convenios o tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala sea parte, podrán someterse a las disposiciones de tales entidades. En estos casos las adquisiciones siempre deberán cumplir con un proceso de concurso público. ”

Artículo 2. Se adiciona el artículo 4 Bis, el cual queda así:

“Artículo 4 Bis. Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones normadas en esta ley y su reglamento.

El sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del sistema y será utilizado por todos los sujetos obligados por esta ley, para las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él se debe publicar la información relativa a todas las fases del proceso de adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan para las adquisiciones públicas.

El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema, incluirá pero no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas, aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS.

Los sujetos obligados de conformidad con la presente ley publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas.

Es obligatorio el uso de formularios electrónicos en todos los procesos de adquisición pública.

Las programaciones de las adquisiciones públicas y sus modificaciones deberán publicarse en GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario por la autoridad superior, mediante resolución debidamente justificada.

El sistema GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas relacionados con las adquisiciones públicas.

El incumplimiento por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo se sancionará según lo previsto en el artículo 83 de la presente ley.”

Artículo 3. Se reforma el artículo 7, el cual queda así:

“**Artículo 7. Fluctuación de precios.** Se entiende por fluctuación de precios el cambio en más (incremento) o en menos (decremento) que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras, sobre la base de los precios que figuran en la oferta de

adjudicatarios e incorporados al contrato; los que se reconocerán por las partes y los aceptarán para su pago o para su deducción. Tratándose de bienes importados se tomará como base, además, el diferencial cambiario y las variaciones de costos. En todo caso se seguirá el procedimiento que establezca el reglamento de la presente ley.

Salvo que en las condiciones de contratación se pacte un precio cerrado, cuando se realice un ajuste por fluctuación de precios, las entidades sujetas a la presente ley elaborarán un informe detallado que justifique dicho ajuste. Este informe se publicará en GUATECOMPRAS y constituirá un anexo del contrato original.”

Artículo 4. Se reforma el artículo 8, el cual queda así:

“**Artículo 8. Precios e índices.** El Instituto Nacional de Estadística -INE- elaborará y publicará mensualmente en GUATECOMPRAS, los precios, salarios e índices que se requieran en los procesos y procedimientos establecidos en esta ley, tales como los precios de referencia o precios promedio.

Las entidades sujetas a la presente ley quedan obligadas a proporcionar la información de precios de los bienes y servicios en la forma y frecuencia que el INE les requiera.

En el caso de bienes y suministros importados, el precio lo establecerá una comisión conformada por un representante del INE, un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria y un representante de las entidades interesadas.

La autoridad contratante deberá solicitar al INE los precios e índices necesarios para los procesos de adquisición pública. El reglamento establecerá la forma y especificaciones en las que se deberán hacer estas solicitudes. El INE deberá publicar las notas metodológicas y procedimientos utilizados.”

Artículo 5. Se reforma el artículo 9, el cual queda así:

“**ARTICULO 9. Autoridades competentes.** Se entenderá como autoridad superior para efectos de la presente ley, las siguientes:

1. Para los Organismos Legislativo y Judicial:

1.1. Cuando el monto exceda de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00) la autoridad superior será el Presidente del Organismo Legislativo o del Organismo Judicial.

1.2. Cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00) al órgano administrativo superior del Organismo.

2. Para la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral:

- 2.1. Cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00) al Presidente de la Corte de Constitucionalidad o al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, respectivamente.
- 2.2. Cuando el monto exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00) al Pleno de la Corte de Constitucionalidad o del Tribunal Supremo Electoral, en su caso.
3. Para las dependencias o entidades del Organismo Ejecutivo, sin personalidad jurídica:
 - 3.1. A las que forman parte de un ministerio, al Ministro del ramo;
 - 3.2. A las que no forman parte de un ministerio, a la autoridad Administrativa Superior;
 - 3.3. A las unidades ejecutoras:
 - 3.4. Al Director Ejecutivo, Gerente o funcionario equivalente, cuando el monto no exceda de novecientos mil (Q.900,000.00).
 - 3.5. Al Ministro del ramo, cuando el monto exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00).
4. Para las entidades estatales con personalidad jurídica, descentralizadas y autónomas:
 - 4.1. Al gerente o funcionario equivalente, cuando el valor total no exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00).
 - 4.2. A la Junta Directiva, autoridad máxima, o en su caso, quien ejerza las funciones de ellas, cuando el valor total exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00).
5. Para las municipalidades y sus empresas ubicadas en las cabeceras departamentales
 - 5.1. Al Alcalde o al Gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00).
 - 5.2. A la Corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa, cuando el valor total exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00).
6. Para las municipalidades y sus empresas ubicadas fuera de las cabeceras departamentales

6.1. Al Alcalde o al Gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00).

6.2. A la Corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa, cuando el valor total exceda de novecientos mil quetzales (Q 900,000.00).

En el caso de negociaciones que realicen las municipalidades, financiadas con recursos provenientes de préstamos otorgados por el Instituto de Fomento Municipal o de entidades financieras internacionales, las actuaciones de la autoridad superior requieren dictamen favorable previo de ese Instituto. Si el Instituto de Fomento Municipal no evacua la consulta o emite este dictamen en un plazo de treinta (30) días, contados a la fecha de recibido el expediente, se entenderá que la opinión del Instituto es favorable.

La autoridad superior de cada entidad designará a los funcionarios o servidores públicos de la entidad contratante que fungirán como autoridad administrativa superior para los efectos de la aplicación de esta ley. Los funcionarios o servidores públicos designados como autoridad administrativa superior deberán tener atribuciones y ejercer funciones jerárquicamente superiores dentro de la estructura orgánica de la entidad contratante, relacionadas con la administración o las adquisiciones que realice la entidad

En los casos no previstos en el presente artículo se entenderá como autoridad superior y autoridad administrativa superior la que se establezca en el contrato o convenio respectivo, o las que correspondan de acuerdo con la organización funcional interna de la entidad que se trate.”

Artículo 6. Se reforma el artículo 10, el cual queda así:

“Artículo 10. Juntas de cotización, licitación o calificación. Las juntas de cotización, licitación o calificación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. Las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto.

Los miembros de las juntas no podrán abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar en donde se encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de la adjudicación.

Las juntas de cotización, licitación o calificación deben dejar constancia de todo lo actuado en las actas respectivas.”

Artículo 7. Se reforma el artículo 11, el cual queda así:

“Artículo 11. Integración de las juntas de cotización, licitación o calificación. Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o calificación

deberán ser servidores públicos, nombrados por la autoridad competente de las entidades según cada modalidad de adquisición. La autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar las juntas.

La idoneidad se verificará mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta contar con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros suplentes deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo ámbito del miembro titular que suplirán.

En caso los servidores públicos nombrados no presenten excusa de conformidad con el artículo 13 de esta ley, la autoridad correspondiente bajo su responsabilidad, dejará constancia por escrito de la verificación de la idoneidad de los miembros nombrados.

En el caso la o las entidades no cuenten con personal idóneo, se podrá nombrar a servidores públicos de otras dependencias del Estado, toda vez se verifique y asegure su idoneidad, según el criterio del párrafo anterior.

La integración de las juntas se hará de la forma siguiente:

- a) En el caso de la modalidad de licitación pública, la junta de licitación estará integrada por cinco miembros titulares e igual número de miembros suplentes, los cuales deberán ser nombrados por la autoridad superior de la entidad contratante.
- b) En el caso de la modalidad de cotización pública, la junta de cotización estará integrada por tres miembros titulares e igual número de miembros suplentes, los cuales deberán ser nombrados por la autoridad administrativa superior de la entidad contratante.
- c) En el caso de la modalidad de compra por contrato abierto, la junta de calificación estará integrada por representantes titulares y suplentes de las entidades u organismos que hayan solicitado o requerido el concurso, nombrados por la autoridad superior de cada una de las entidades u organismos solicitantes o requirentes.

La junta de calificación podrá solicitar asistencia de asesores, tanto de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, como de las entidades requirentes, cuando lo considere necesario.

En los casos en los que el número de entidades u organismos que hayan solicitado o requerido el concurso de compra por contrato abierto, y por ende el número de integrantes de la junta de calificación sea par, cada vez que en una votación se tenga igual número de votos favorables y desfavorables, se repetirá la votación hasta una tercera vez. Si en las tres votaciones consecutivas se obtiene igual número de votos favorables y desfavorables, la junta declarará

imposibilidad para tomar decisión. La junta de calificación deberá dejar en el acta respectiva constancia por escrito de este procedimiento.

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, las juntas de licitación, cotización o calificación podrán solicitar asistencia de asesores de entidades del sector público con rectoría, atribuciones o especialidades relevantes al negocio a adjudicar.

La autoridad responsable del nombramiento de los miembros de las juntas, deberá dejar constancia por escrito de todas sus actuaciones relativas a la integración de las juntas.”

Artículo 8. Se reforma el artículo 12, el cual queda así:

“Artículo 12. Impedimentos para integrar las juntas de cotización, licitación o calificación. No podrán ser miembros de las juntas de licitación, cotización o calificación, quienes tengan alguno de los impedimentos siguientes:

- a) Ser parte en el asunto.
- b) Haber sido representante legal, gerente o empleado o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito, en el asunto o en la empresa oferente.
- c) Tener, o que alguno de sus parientes dentro de los grados de ley, interés directo o indirecto en el asunto.
- d) Tener parentesco dentro de los grados de ley, con alguna de las partes.
- e) Ser pariente dentro de los grados de ley, de la autoridad superior o la autoridad administrativa superior de la institución.
- f) Haber aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes.
- g) Ser socio o partícipe con alguna de las partes.
- h) Haber participado en la preparación del negocio, en cualquier fase.”

Artículo 9. Se reforma el artículo 13, el cual queda así:

“Artículo 13. Excusa obligatoria para integrar las juntas de cotización, licitación o calificación. No podrán ser miembros de las juntas de licitación, cotización o calificación, y deberán excusarse en los casos siguientes:

- a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que según las pruebas y circunstancias hagan dudar de la imparcialidad.
- b) Cuando el o la integrante o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas.
- c) Cuando el o la integrante viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones.

- d) Cuando el o la integrante haya intervenido en el asunto que se convoque.
- e) Cuando el o la integrante o sus parientes dentro de los grados de ley, hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos.
- f) Cuando el cónyuge o los parientes consanguíneos del integrante hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes.
- g) Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del integrante o éste de aquellas.
- h) Cuando el o la integrante, su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, hermanas y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al integrante o a cualquiera de sus parientes mencionados.
- i) Cuando el integrante, su cónyuge o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo haya tenido un año antes.
- j) Cuando el integrante, antes de adjudicar, haya externado opinión en el asunto que se ventila.
- k) Cuando el asunto pueda resultar en daño o provecho para los intereses del integrante, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos.
- l) Cuando el integrante, su cónyuge, o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar unas de las partes al integrante o éste a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso.
- m) Por no cumplir ninguno de los criterios de idoneidad establecidos en el artículo 11 de esta ley.
- n) Por razones establecidas en esta ley o en otras leyes vigentes.

Los servidores públicos que sean nombrados para integrar una junta y que deben excusarse según lo establecido en este artículo, en un plazo no mayor a un día hábil a partir del momento que conozcan el impedimento deberán presentar su excusa por escrito razonando y acreditando las causales que justifican la excusa. La autoridad nominadora de la Junta deberá resolver en un plazo no mayor a un día hábil. El reglamento establecerá el procedimiento. Los servidores públicos que presenten excusas frívolas o que teniendo obligación de presentar excusa no lo hicieren, serán sancionados conforme

al régimen sancionatorio administrativo del Estado o entidad que se refiere, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se puedan derivar.”

Artículo 10. Se reforma el artículo 14, el cual queda así:

“**Artículo 14. Recusación.** Son causas de recusación como integrante de una junta de cotización, licitación o calificación las mismas de los impedimentos establecidos en el artículo 12 y de las excusas establecidas en el artículos 13 de esta ley.”

Artículo 11. Se reforma el artículo 15, el cual queda así:

“**Artículo 15. Dirección General de Adquisiciones del Estado.** La Dirección General de Adquisiciones del Estado es el ente rector de las adquisiciones públicas, responsable de facilitar procesos, proponer o aprobar la normativa en el ámbito de su competencia. El objeto de la Dirección General de Adquisiciones del Estado es procurar que las adquisiciones públicas se desarrollen en un marco general de transparencia, certeza, eficiencia y competencia en las adquisiciones públicas. Entre sus funciones se encuentra:

- a. Ser el órgano rector de las adquisiciones públicas y del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – GUATECOMPRAS-;
- b. Diseñar, administrar, normar e implementar políticas destinadas para el desarrollo de GUATECOMPRAS;
- c. Establecer procedimientos para la adecuada aplicación de la legislación en materia de adquisiciones públicas;
- d. Coordinar la modalidad de Compra por Contrato Abierto;
- e. Decidir el destino de los fondos privativos de la dirección para el fortalecimiento, desarrollo y modernización de los sistemas, procesos y procedimientos de adquisiciones públicas;
- f. Capacitar periódicamente a las entidades del sector público en materia de procedimientos para las adquisiciones públicas;
- g. Certificar a los funcionarios o empleados públicos responsables de las adquisiciones en las entidades sujetas a la presente ley;
- h. Requerir a todas las entidades del sector público por medio del sistema GUATECOMPRAS su programación anual de compras para su optimización y elaboración de estadísticas y sus modificaciones;
- i. Estandarizar los procesos de contrataciones de las entidades públicas;
- j. Generar y mantener actualizadas estadísticas, las cuales serán de acceso público; y,

- k. Otras que establezca el reglamento, la ley y el Despacho ministerial, en el ámbito de su competencia.”

Artículo 12. Se reforma el artículo 16, el cual queda así:

“Artículo 16. Recursos privativos de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. El régimen económico financiero para la Dirección General de Adquisiciones del Estado está constituido con los siguientes recursos:

- a) Recursos financieros del presupuesto general del Estado;
- b) Fondos privativos provenientes de los pagos que realicen los proveedores o contratistas adjudicados correspondientes a tasas por servicios de GUATECOMPRAS. El reglamento especificará estas tasas y los procedimientos correspondientes.

Estos recursos serán administrados en concepto de fondo privativo por la Dirección General de Adquisiciones del Estado.”

Artículo 13. Se adiciona el artículo 24 Bis, el cual queda así:

“Artículo 24 bis. Presentación de ofertas electrónicas. Para cualquier modalidad de compra regulada en esta ley, en la que se soliciten ofertas de forma electrónica, deberán acatarse las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas de uso del sistema GUATECOMPRAS”.

Artículo 14. Se adiciona el artículo 25 Bis, el cual queda así:

“ARTICULO 25 Bis. Pacto colusorio. Se entiende por pacto colusorio el convenio, acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más entidades participantes, sus accionistas, representantes legales o ejecutivos, en la presentación de ofertas en procesos de adquisición pública que tenga por objeto o produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la libre competencia en un determinado proceso o acto, causando perjuicio a terceros.

También se entenderá que existe pacto colusorio cuando dos o más sociedades que formen parte, cada una de ellas, de un mismo grupo empresarial o corporativo, según la definición de partes relacionadas contenida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, participen en el mismo proceso de adquisición pública.

Los responsables del pacto colusorio se sancionarán como autores del delito de colusión, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se deriven del acto.

Los miembros de la junta que tengan conocimiento de indicios de pacto colusorio están obligados a realizar la denuncia a las autoridades correspondientes. El juez competente,

una vez dictada la sentencia condenatoria, queda obligado a emitir las resoluciones respectivas para cancelar la inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado.”

Artículo 15. Se reforma el artículo 36, el cual queda así:

“Artículo 36. Aprobación de la adjudicación. Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicación y contestadas las inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada de conformidad con lo establecido la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente. La autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado.

Si la autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores de adoptada la decisión. La Junta, con base en las observaciones formuladas por la autoridad superior, podrá confirmar o modificar su decisión original en forma razonada, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibido el expediente, revisará lo actuado y hará la adjudicación que conforme a la ley y las bases.

Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la decisión, la Junta devolverá el expediente a la autoridad superior, quien dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes podrá aprobar, improbar o prescindir de la negociación. En caso de improbar, se notificará electrónicamente a través de GUATECOMPRAS dentro de los dos (2) días hábiles siguientes dando por concluido el evento. En caso de prescindir, aplicará lo establecido en el artículo 37 de esta ley. En los casos en los que la autoridad superior decida improbar o prescindir, razonará la decisión en la resolución correspondiente.”

Artículo 16. Se reforma el artículo 40, el cual queda así:

“Artículo 40. Aprobación del formulario y de documentos para cotización. El formulario y los documentos indicados en el artículo anterior, deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la entidad contratante, antes de requerirse las ofertas”.

Artículo 17. Se reforma el artículo 41, el cual queda así:

“Artículo 41. Presentación de cotizaciones. Los interesados presentarán sus ofertas en forma electrónica, en un formulario que proveerá el sistema de GUATECOMPRAS, y la oferta se podrá acompañar con la documentación física y demás requerimientos y formalidades. Los precios unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos,

expresados en quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule.

La junta de cotización deberá evaluar todas las ofertas recibidas.

En caso que no se recibieran ofertas, la Junta de Cotización deberá informar a la autoridad administrativa superior un día hábil después de la fecha establecida para la recepción de ofertas, quien deberá publicar en GUATECOMPRAS, una extensión de ocho días al plazo para recibir ofertas. Si en este plazo no se recibieran ofertas, la autoridad administrativa superior queda en libertad de efectuar una contratación directa, siempre que se haga utilizando las mismas bases de cotización utilizadas en el evento desierto, y el oferente cumpla con todos los requisitos allí solicitados.”

Artículo 18. Se reforma el nombre del Capítulo III, el cual queda así:

“CAPÍTULO III

“MODALIDADES ESPECÍFICAS DE ADQUISICIONES DEL ESTADO Y EXCEPCIONES”

Artículo 19. Se reforma el artículo 43, el cual queda así:

“**Artículo 43. Modalidades Específicas.** Las modalidades específicas de adquisición pública son:

a) **Compra de Baja Cuantía:** La modalidad de compra de baja cuantía consiste en la adquisición directa de bienes, suministros, obras y servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos competitivos de las demás modalidades de adquisición pública contenidas en la presente ley, cuando la adquisición se por un monto de hasta diez mil quetzales (Q 10,000.00). La compra de baja cuantía se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición pública.

Las compras de baja cuantía deberán publicarse en GUATECOMPRAS una vez recibido el bien, servicio o suministro, debiendo publicar la documentación de respaldo conforme al expediente administrativo que ampare la negociación realizada por constituir información pública de oficio. Cada entidad determinará los procedimientos para la aplicación de esta modalidad.

b) **Compra Directa:** La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización cuando la adquisición sea por montos mayores a diez mil quetzales (Q 10,000.00) y que no superen los noventa mil quetzales (Q90,000.00).

Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan previamente en la oferta electrónica cuando corresponda. Esta modalidad de compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.

La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la adjudicación, se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el monto adjudicado.

- c) Adquisición con proveedor único:** La modalidad de adquisición con proveedor único es en la que el bien o servicio a adquirir, por su naturaleza y condiciones, solamente puede ser adquirida de un único oferente.

Para establecer el extremo al que se refiere párrafo anterior el organismo, dependencia o entidad interesada hará una publicación en el diario oficial, otra en uno de los diarios de mayor circulación en el país y en GUATECOMPRAS, invitando a los interesados en ofertar la contratación de los bienes, suministros o servicios solicitados, señalando día, hora y lugar para que presenten su disposición a ofertar.

En dicha invitación se especificarán las características de lo que se desea adquirir y el plazo para presentar la manifestación de interés, el cual no podrá ser mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la última publicación.

Se designará una comisión receptora formada por tres miembros nombrados por la autoridad administrativa superior de la dependencia interesada en la negociación. Si a la hora señalada no concurrieren interesados o se presente uno solo, se hará constar en el acta de recepción y se procederá de la forma siguiente:

- a) En el primer caso la autoridad competente queda facultada para comprar o contratar directamente con cualquier persona;
- b) En el segundo, podrá contratar con el único interesado en ofertar;

Si se presentare más de un oferente, la comisión receptora después de levantar el acta respectiva, procederá de inmediato a rendir un informe escrito a la autoridad superior de la entidad interesada en la negociación para que proceda a efectuar la modalidad de adquisición aplicable.

En este proceso se deberá publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS requiera.

Esta modalidad se empleará en el caso específico de la compra o arrendamiento de bienes inmuebles que sean indispensables por su localización, naturaleza y condiciones para la realización de obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos de una solo proveedor. En estos casos el precio de compra no deberá exceder el avalúo que practique el Ministerio de Finanzas Públicas.

d) Arrendamientos: Los arrendamientos se sujetarán a la modalidad de cotización. Las bases de cotización y especificaciones técnicas deberán requerir como mínimo:

1. Valor de compra del bien a arrendar
2. Valor total del contrato o sumatoria de las cuotas o rentas incluyendo el pago inicial, si lo hubiere, y la opción a compra en su caso;
3. Valor mensual de las rentas o cuotas;
4. Causales de resolución del contrato;
5. En caso hubiere opción de compra, esta no podrá en ningún caso ser mayor al valor de una cuota mensual;
6. Detalle de la integración de la cuota o renta, especificando cargos por uso o goce, mantenimiento, seguros, costos implícitos u otros cargos, cuando hubiere;
7. Los seguros y garantías necesarias;

En todos los contratos de arrendamiento se incluirá la obligación de realizar inspecciones físicas del bien. Las inspecciones serán realizadas por la arrendante por medio de un delegado. Estas inspecciones contendrán como mínimo un reporte general del estado y funcionamiento de los bienes arrendados, así como el cumplimiento del programa de mantenimiento. A las inspecciones se acompañará la documentación necesaria para comprobar la veracidad del reporte, tales como fotografías y video grabaciones, entre otros.

Cuando se ejerza la opción a compra se deberá solicitar la garantía establecida en el artículo 67 de esta ley.

Los plazos serán establecidos en base a la naturaleza del bien y a la utilidad y necesidad del requirente. No podrá prorrogarse el plazo contractual.

Los arrendamientos con proveedor único se realizarán de conformidad a la modalidad de adquisición con proveedor único.”

Artículo 20. Se reforma el artículo 44, el cual queda así:

Artículo 44. Casos de excepción. Se establecen los siguientes casos de excepción:

- a) No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de servicios públicos o que sea inminente tal suspensión.;
- b) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, podrán adquirir de manera directa vacunas, medicamentos antiretrovirales, métodos de planificación familiar, fármacos, micronutrientes, suministros quirúrgicos y de laboratorio, al amparo de convenios o tratados internacionales suscritos con los organismos siguientes: la Oficina Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud -OPS/OMS-; el Fondo Mundial -FM-; el Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA- o por Negociación Regional de Precios que efectúe la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana -SE-COMISCA-. La ejecución de estas negociaciones se sujetará a los términos de los instrumentos contractuales suscritos;
- c) Las entidades del Estado podrán realizar de manera directa las adquisiciones que se realicen en el extranjero;
- d) El Banco de Guatemala, por la naturaleza de sus funciones, podrá realizar de manera directa la contratación de la acuñación de moneda metálica terminada, la compra de metales necesarios para la acuñación de moneda, la compra de sistemas, de equipos y la impresión de formas de billete de banco y de títulos valores. La compra de oro y plata deberá hacerse a los precios del día, o a uno menor, según cotización internacional de la bolsa de valores de Londres;
- e) Los sujetos obligados de conformidad con la presente ley podrán realizar de manera directa la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales en general; y,
- f) El Tribunal Supremo Electoral podrá, durante el ejercicio fiscal en el que se realicen procesos electorales y de consulta popular, realizar de manera directa las adquisiciones públicas directamente vinculadas a la realización de estos eventos.

Artículo 21. Se reforma el artículo 45, el cual queda así:

“Artículo 45. Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del Estado y excepciones. Las adquisiciones en que se aplique cualquiera de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado o en los casos de excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento.

En cada proceso se deberá publicar la documentación e información que el sistema GUAATECOMPRAS requiera.”

Artículo 22. Se reforma el artículo 46, el cual queda así:

“Artículo 46. Contrato abierto. Contrato abierto es la modalidad de adquisición coordinada por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, con el objeto de seleccionar proveedores de bienes, suministros y servicios de uso general y constante, o de considerable demanda, previa calificación y adjudicación de los distintos rubros que se hubieren convocado a concurso público, a solicitud de dos o más instituciones de las contempladas en el artículo 1 de esta ley, para el cumplimiento de sus programas de trabajo. La Dirección General de Adquisiciones del Estado normará los requisitos mínimos del contrato abierto.

Para los efectos del contrato abierto deberá tomarse en cuenta la compra por volumen que incide en mejores precios y la estandarización de especificaciones que hacen más económica y práctica la adquisición.

Queda exonerada de los requisitos de licitación y cotización, la compra y contratación de bienes, suministros y servicios que lleven a cabo las entidades a las que se refiere el artículo 1 de esta ley, quienes lo podrán hacer directamente con los proveedores seleccionados por medio de contrato abierto por el Ministerio de Finanzas Públicas.”

Artículo 23. Se reforma el artículo 46 Bis, el cual queda así:

“ARTICULO 46 Bis. Procedimiento de contratación para la modalidad de contrato abierto. La contratación se ajustará al procedimiento siguiente:

- a) Convocatoria: El proceso de contrato abierto se iniciará con la solicitud, por escrito, a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, que efectúen dos o más instituciones de las reguladas en el artículo 1 de la presente ley.
- b) Procedimiento: Para el contrato abierto es aplicable el procedimiento establecido para el régimen de licitación pública, y se deberá cumplir con lo establecido en los artículos 18 al 23, así como otros aspectos que le sean aplicables en esta ley.
- c) Bases: La elaboración de las bases del concurso y especificaciones técnicas del contrato abierto, es responsabilidad de las instituciones requirentes, con el apoyo técnico de la Dirección General de Adquisiciones del Estado en el ámbito de su competencia. Las entidades requirentes nombrarán personal técnico para el proceso de elaboración de las bases. Para el nombramiento de este personal técnico se aplicarán los requisitos, impedimentos, excusas y recusación que para las juntas de calificación establece esta ley.

Para el caso de productos medicinales, material médico quirúrgico, dispositivos médicos, gases médicos, fórmulas infantiles, material de diagnóstico por imágenes y productos sucedáneos de la leche materna, por la naturaleza de los mismos, las bases del concurso y especificaciones técnicas serán elaboradas por las entidades requirentes, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con la Dirección General de Adquisiciones del Estado, debiendo tomar en cuenta lo establecido en el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines, en lo que se refiere a seguridad, eficacia y calidad.

Una vez elaboradas las bases, se procederá de la siguiente forma:

1. Las instituciones requirentes deberán nombrar al personal técnico en la materia, uno por cada entidad, para emitir opinión sobre su contenido. Para el nombramiento de este personal técnico, se aplicarán los requisitos, impedimentos, excusas y recusación que para las juntas de calificación establece esta ley.
2. Una vez recibida la opinión, el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la dependencia de Asesoría Jurídica, emitirá opinión jurídica sobre las respectivas bases de cada concurso.
3. Analizada la opinión jurídica, las instituciones requirentes manifestarán su anuencia por escrito al contenido de las bases del contrato abierto, para continuar con el procedimiento de contratación y trasladarán el expediente a la Dirección General de Adquisiciones del Estado.
4. Una vez recibido el expediente, la Dirección General de Adquisiciones del Estado podrá aprobar o improbar las bases en un plazo no mayor a los cinco días hábiles siguientes, con causa justificada de conformidad con lo establecido la ley, de lo cual quedará constancia escrita.

En el caso de no aprobación, la resolución deberá estar debidamente razonada, y dentro de los dos días hábiles posteriores a esta decisión la Dirección General de Adquisiciones del Estado devolverá a las entidades requirentes el expediente y solicitará la reformulación de las bases atendiendo los razonamientos consignados en la resolución. Si las autoridades requirentes, con base a lo resuelto por la Dirección General de Adquisiciones del Estado confirman o modifican el contenido de las bases, devolverán el expediente a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, quien dentro de los cinco días hábiles subsiguientes, podrá aprobar o improbar las bases.

- d) Convocatoria: La convocatoria a un concurso de contrato abierto será de alcance nacional o regional, según se indique en las bases y especificaciones técnicas. Para la publicación de la convocatoria se procederá de acuerdo a lo que establece el procedimiento de licitación contemplado en esta ley.
- e) Asistente: El Ministerio de Finanzas Públicas nombrará un asistente de contrato abierto que será responsable de la custodia y diligenciamiento del expediente administrativo respectivo; asimismo, apoyará a la Junta de Calificación en la elaboración de los documentos que sean necesarios, conforme a las instrucciones giradas por dicha Junta.
- f) Registro: El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, llevará un registro informático, mediante una base de datos, de los bienes, suministros o servicios de uso general y constante o de considerable demanda que necesite el sector público y que sean requeridos en la modalidad de compra por contrato abierto. En el citado registro se deberán agrupar los bienes, suministros o servicios de acuerdo a su naturaleza y contener, como mínimo, el código de identificación, número de renglón, especificación técnica, precio y proveedor adjudicado en cada uno de los concursos de oferta de precios que se lleven a cabo bajo esta modalidad. Este registro será público y estará a disposición de todas las entidades contempladas en el artículo 1 de esta ley.
- g) Precios de referencia: La Dirección General de Adquisiciones del Estado, una vez solicitado el concurso de contrato abierto y aportadas las especificaciones técnicas, deberá solicitar los precios de referencia al Instituto Nacional de Estadística -INE-, de acuerdo a lo regulado en el artículo 8 de esta ley. Una vez recibido estos precios, la Dirección General de Adquisiciones del Estado publicará en GUAATECOMPRAS los precios de referencia y los trasladará a la junta de calificación.

Para aquellos renglones en los cuales el Instituto Nacional de Estadística – INE – no cuente con un precio de referencia, en un plazo no mayor a cinco días, de conformidad con el artículo ocho de esta ley, requerirá a las entidades solicitantes, a la Dirección General de Adquisiciones del Estado y a toda entidad que estime pertinente, información y datos que permitan determinar el precio de referencia. Una vez realizado este procedimiento, el Instituto Nacional de Estadística trasladará a la Dirección General de Adquisiciones del Estado estos precios de referencia.

- h) Adjudicación: La Junta de Calificación adjudicará total o parcialmente, según lo establecido en los artículos 28, 33 y 34 de esta ley, y lo establecido para el efecto en las bases.

La Junta de Calificación está obligada a utilizar los precios de referencia regulados en la literal anterior.

La Junta de Calificación podrá adjudicar hasta tres proveedores por marca ofertada, con un máximo de ocho marcas por renglón, siempre y cuando la diferencia de precio entre el oferente que haya sido calificado con el precio más bajo y el de los restantes no supere una variación de precios mayor del tres por ciento (3%) con relación al precio más bajo. Si se da el caso que por cada marca hubiere más de tres oferentes con el mismo precio, la Junta de Calificación realizará un sorteo público para adjudicar a tres oferentes. Si se diera el caso que por cada marca hubiere más de tres oferentes con diferente precio, se adjudicará a los tres oferentes que presenten los precios más bajos.

La aprobación de la adjudicación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de esta ley. Contra la aprobación de la adjudicación efectuada por la autoridad superior del ente administrador y coordinador del contrato abierto, procede solamente el recurso de reposición contemplado en los artículos 100 y 101 de esta ley, el cual será resuelto según la ley de la materia.

La Junta de Calificación no llevará a cabo la adjudicación, si el precio de la oferta es igual o superior a los precios de referencia registrados por el Instituto Nacional de Estadística INE, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la presente ley.

Si por alguna razón no se suscribiera el correspondiente contrato abierto para un concurso adjudicado por la Junta de Calificación, o bien, si un contrato suscrito se rescindiere total o parcialmente, a efecto de asegurar el abastecimiento y no repetir el procedimiento, podrá optarse por adjudicar al subsiguiente calificado en su orden, siempre y cuando el precio ofertado no supere el tres por ciento (3%) con relación al precio más bajo.

- i) Contratos: Los contratos abiertos serán celebrados por el Ministerio de Finanzas Públicas y serán suscritos, para su formalización, por el funcionario público que delegue la autoridad superior de la entidad administradora y coordinadora del contrato abierto, conjuntamente con el funcionario público que en cada caso deleguen las autoridades superiores de las entidades requirentes y el propietario o representante legal de la empresa o entidad adjudicada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles a partir de la adjudicación definitiva, habiéndose agotado previamente el plazo para interposición de recursos establecido en el artículo 101 de esta ley.

La aprobación de los contratos abiertos se hará por la autoridad superior de la entidad administradora y coordinadora de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de esta Ley y estarán vigentes por el plazo que en cada concurso se determine.

Los contratos abiertos estarán vigentes por el plazo que en cada concurso se determine, no pudiendo exceder de dos años, los cuales podrán ser prorrogados únicamente una vez por un plazo igual o menor.

- j) Casos de incumplimiento: Para todos los casos de incumplimiento de los contratos abiertos, deberá ser notificado a la autoridad superior de la entidad afectada o quien ésta designe, para que se efectúe el análisis correspondiente.

Para el caso particular de incumplimiento de entrega y variación de las condiciones contratadas a la autoridad superior de la entidad afectada, podrá autorizar la compra de los bienes y suministros objeto del incumplimiento para que los mismos puedan ser adquiridos fuera del contrato abierto, siguiendo los procedimientos establecidos en esta ley.

Para cualquiera de los supuestos establecidos en los párrafos anteriores, el expediente documentado deberá ser trasladado a la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, para que aplique las sanciones reguladas en esta ley.

Los incumplimientos de calidad serán conocidos por la Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo de Contrato Abierto, la cual es nombrada de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso, la que luego de agotadas las instancias pertinentes, trasladará la sanción correspondiente a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, para las gestiones que correspondan, como ente administrador y coordinador del contrato abierto.

Las sanciones aplicadas como consecuencia de los incumplimientos, cuando proceda, deberán ser anotadas en el Registro de Proveedores de GUAATECOMPRAS.

- k) Ejecución: Para la eficaz ejecución de los contratos abiertos que se celebren con motivo de la aplicación de las normas procedimentales reguladas en el presente artículo, se integrará en forma coordinada con una Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo de Contrato Abierto, constituida de acuerdo a la naturaleza de los suministros y bienes contratados de conformidad con las bases del concurso. Los documentos de contrato abierto que en cada caso rijan la negociación, establecerán todo lo relativo a esta Comisión.

Para el caso de los contratos abiertos que se deriven de los concursos solicitados por el sector salud, por la naturaleza de los mismos, la Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo de Contrato Abierto, conocerá los casos de incumplimiento de calidad, la que luego de agotadas las instancias pertinentes, trasladará la sanción temporal a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, para las gestiones que correspondan, como ente administrador y coordinador del contrato abierto, para resguardar el derecho a la salud de los usuarios de la red hospitalaria. De acuerdo a lo estipulado en las bases del concurso dicha Comisión será una entidad colegiada integrada por las entidades requirentes, cámaras, gremiales y asociaciones correspondientes, la cual deberá ser presidida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o por quien éste designe.

- l) Prohibiciones: Las autoridades indicadas en el artículo 9 de esta ley, no deberán autorizar el pago de adquisiciones hechas por otras modalidades de compra, si los precios son iguales o superiores a los que figuren en los listados de bienes y suministros adjudicados en contrato abierto, así como la compra de productos de contrato abierto si estos no se encuentran vigentes; de efectuarse cualquiera de las acciones indicadas será responsabilidad de la autoridad que lo autorice.
- m) Publicación: Los listados de los productos de bienes y suministros adjudicados en contrato abierto serán publicados en el sistema GUATECOMPRAS, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de aprobación del contrato respectivo”.

En los concursos de precios por contrato abierto, en caso que el Instituto Nacional de Estadística -INE- no cuente con el precio de referencia actualizado requerido, y así lo informare por escrito a Dirección General de Adquisiciones del Estado, las instituciones públicas solicitantes deberán proporcionar a la Dirección el precio de referencia respectivo. Una vez recibidos los precios de referencia, la Dirección los trasladará a la junta de calificación y los publicará en GUATECOMPRAS, posterior a la recepción de las ofertas.”

Artículo 24. Se reforma el artículo 51, el cual queda así:

“**Artículo 51. Prórroga contractual.** A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la entrega de bienes y suministros o el inicio en la prestación de un servicio podrá prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De aprobarse la primera y única prórroga deberá de iniciarse de inmediato el trámite para la compra o contratación por cualesquiera de los regímenes competitivos establecidos en la presente ley.”

Artículo 25. Se adiciona el artículo 54 Bis, el cual queda así:

“Artículo 54 Bis. Subasta Electrónica Inversa. La Subasta Electrónica Inversa es una modalidad de adquisición pública de bienes y servicios estandarizados u homologados, dinámica, operada en el sistema GUATECOMPRAS, en la cual los postores habilitados pujan de forma pública, electrónica y en tiempo real, durante un plazo preestablecido, con base a un precio de referencia de conocimiento público previo al evento, el cual servirá como techo de partida para el proceso. Las posturas durante la puja no podrán proponer precios superiores al de referencia y deberán aceptarse solo posturas con precios menores a la postura anterior. La adjudicación se hará a la postura con el precio más bajo obtenido durante el proceso.

El precio de referencia techo lo proporcionará el Instituto Nacional de Estadística de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de esta ley y su reglamento.

Para los efectos de la subasta electrónica inversa, debe tomarse en cuenta la compra por volumen que incida en mejores precios y la estandarización de especificaciones que hacen más económica y práctica la adquisición.

La entidad contratante establecerá los requisitos y criterios que se deberán cumplir para habilitarse como postores en un evento de subasta electrónica inversa. Además, será responsable de definir las especificaciones técnicas y las condiciones de la negociación, debiendo asegurarse que dichos documentos permitan la competencia. La autoridad administrativa superior de la entidad contratante será responsable de aprobar la adjudicación.

La puja mediante este tipo de procedimiento deberá ser autorizada únicamente cuando el número de postores habilitados sea mayor o igual a tres.

La entidad contratante realizará en el sistema GUATECOMPRAS la convocatoria para la subasta electrónica inversa, con un plazo no menor de 8 días antes del inicio del proceso.

El reglamento de la ley regulará todas las condiciones de las etapas en las que sustenta esta modalidad.”

Artículo 26. Se reforma el artículo 62, el cual queda así:

“Artículo 62. Plazo para pagos. Los pagos por gastos devengados derivados de los contratos regulados por esta ley se harán al contratista o proveedor durante los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se presente la documentación completa que estipule el contrato. Se entiende por efectuado el pago, cuando el contratista o proveedor haya recibido el cheque, o cuando el acreditamiento bancario electrónico se encuentre disponible en cuenta del contratista o proveedor.

Las entidades a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, están obligadas a priorizar el pago a proveedores en forma cronológica. Por orden cronológico se entiende el principio de primero en entrar, primero en salir.”

Artículo 27. Se reforma el artículo 69, el cual queda así:

“Artículo 69. Formalidades. Las fianzas a que se refiere este capítulo, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala de conformidad con las siguientes disposiciones:

- a) La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original.
- b) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas.
- c) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes.
- d) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho.
- e) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar.

Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta ley serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo.

El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas.

El reglamento establecerá los procedimientos correspondientes a lo regulado en este artículo.”

Artículo 28. Se reforma el artículo 71, el cual queda así:

“Artículo 71. Registro General de Adquisiciones del Estado. El Registro General

de Adquisiciones del Estado está adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas. Tiene por objeto registrar a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para poder ser habilitadas como contratistas o proveedores del Estado en las modalidades de adquisición pública establecidas en esta ley. El registro verificará la capacidad financiera y técnica, así como la experiencia y especialidad necesarias para ser contratista o proveedor del Estado y relacionadas con los negocios con el Estado de que se trate. Cuenta con personal interdisciplinario y los recursos necesarios para poder cumplir con objetividad y calidad sus fines.

El Registro es el responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la información y derechos de las personas inscritas. El Registro es electrónico y utilizará medios tecnológicos actualizados para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la ley de Acceso a la Información Pública.

El Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, emitirá el reglamento del Registro en donde se establecerán los respectivos aranceles a cobrar a sus usuarios, los cuales serán privativos para el funcionamiento, fortalecimiento y modernización del mismo. El Registro General de Adquisiciones del Estado, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, está facultado para celebrar contratos y convenios de cooperación técnica y financiera, los que serán públicos.”

Artículo 29. Se reforma el artículo 72, el cual queda así:

“Artículo 72. Características y funciones del Registro. El Registro General de Adquisiciones del Estado tendrá:

- a) Las características siguientes
 - i. Operará de forma electrónica la inscripción, modificación, actualización y cancelación de la información;
 - ii. Operará por medio de inscripción de formularios electrónicos estándar de acuerdo a los requisitos establecidos por el reglamento. Las notificaciones que haga el Registro se realizarán de forma electrónica;
 - iii. Estará organizado por medio de libros electrónicos;
 - iv. Se organizará por un sistema de folio electrónico personal;
 - v. Estará dotado de las medidas de seguridad indispensables para comunicaciones electrónicas, incluyendo la autenticación o certificación electrónica de la existencia de las inscripciones;
 - vi. Estará interconectado y comunicado, a efectos de obtener y cruzar información, con otras entidades y registros, incluyendo pero no

limitándose a: el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil General de la República, el Registro de la Propiedad Intelectual, el Registro Nacional de las Personas, el Registro Tributario Unificado, el Registro de Personas Jurídicas, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, los ministerios y secretarías de Estado y las entidades descentralizadas y autónomas, entre otras. Podrá requerir la información necesaria a las distintas entidades del Estado, quienes estarán obligadas a proporcionar la información requerida por el Registro, en la forma y frecuencia que se les requiera, de conformidad con la legislación aplicable;

- vii. Estará dotado para cobrar los fondos privativos provenientes de los aranceles del Registro General de Adquisiciones del Estado; y,
- viii. Las demás que se establezcan en la presente ley y su reglamento.

b) Las funciones siguientes

- i. Verificar la capacidad técnica y financiera de las personas inscritas en el Registro. Para ello, podrá requerir la información y documentación necesaria, de conformidad con el reglamento.
- ii. Operar las solicitudes de inhabilitación a proveedores o contratistas de conformidad con la presente ley y mediante el proceso que se establezca en el reglamento.
- iii. Conocer, operar y resolver los expedientes que tramita;
- iv. Resolver los conflictos derivados de sus funciones dentro del ámbito de su competencia;
- v. Imponer las sanciones que corresponda de conformidad a esta ley y su reglamento; y,
- vi. Las demás que le establezca la presente ley y su reglamento”

Artículo 30. Se reforma el artículo 73, el cual queda así:

“Artículo 73. Calidades del Registrador. El registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado debe contar con las siguientes calidades:

- a) Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
- b) Ser profesional colegiado activo con al menos diez años de ejercicio profesional
- c) Gozar de reconocida honorabilidad;

- d) No haber sido condenado por delitos que impliquen falta de probidad; y,
- e) Las demás que sean comunes a los servidores públicos.

El Registrador es nombrado por el Ministro de Finanzas Públicas para un período de cinco años, actúa con independencia técnica y se coordinará con la Dirección General de Adquisiciones del Estado. Así mismo, tiene prohibido ejercer su profesión fuera de sus obligaciones dentro del Registro General de Adquisiciones del Estado, salvo la actividad docente.”

Artículo 31. Se reforma el artículo 74, el cual queda así:

“Artículo 74. Causales de remoción del Registrador. El Registrador del Registro General Adquisiciones del Estado podrá ser removido por el Ministro de Finanzas Públicas, cuando se produzca cualquiera de las situaciones siguientes:

- a) Haber sido condenado en sentencia firme en juicio penal. En caso de dictarse auto de prisión preventiva quedará inhabilitado temporalmente para el ejercicio de sus atribuciones, funciones y facultades, y lo sustituirá temporalmente la persona que el Ministro de Finanzas Públicas designe;
- b) Haber sido declarado por tribunal competente en estado de interdicción o de quiebra;
- c) Padecer de discapacidad física que lo imposibilite de manera permanente para ejercer sus funciones;
- d) Haber cometido actos fraudulentos, ilegales o evidentemente contrarios a las funciones del Registro General Adquisiciones del Estado; y,
- e) Haberse postulado como candidato para un cargo de elección popular.”

Artículo 32. Se reforma el artículo 75, el cual queda así:

“Artículo 75. Libros del Registro. El registro tendrá, como mínimo, los siguientes libros electrónicos:

- a) Registro de precalificados de contratistas;
- b) Registro de precalificados de consultores;
- c) Registro de proveedores; y,
- d) Registro de contratos.

El registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado podrá habilitar otros libros que considere conveniente.”

Artículo 33. Se reforma el artículo 77, el cual queda así:

“Artículo 77. Inscripción provisional de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras podrán participar en cualquier modalidad de compra establecida en esta ley, con su inscripción provisional en el registro correspondiente. En todo caso es requisito indispensable acreditar la inscripción definitiva en el registro antes de la adjudicación”

Artículo 34. Se reforma el artículo 80, el cual queda así:

“ARTICULO 80. Prohibiciones. No podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado:

- a) Quienes estén obligados a inscribirse en los registros establecidos en la presente ley y que no se hayan inscrito o se encuentren inhabilitados en alguno de esos registros al momento de participar en un concurso de adquisición pública. Toda entidad contratante que determine que, de acuerdo a la legislación aplicable, una persona debe ser inhabilitada como proveedor o contratista del Estado, registrará la inhabilitación donde corresponda.

Concluidos los procedimientos administrativos de la entidad contratante, quedarán inhabilitados por un plazo mínimo de dos años en los registros establecidos en la presente ley, los proveedores y contratistas del Estado que hayan incumplido el objeto del contrato por causas imputables al proveedor o contratista. En el caso que el proveedor o contratista sea una persona jurídica, concluido el procedimiento administrativo en la entidad contratante, la inhabilitación aplicará por un plazo mínimo de dos años a los propietarios y representantes legales del contratista.

- b) Quienes tengan obligaciones tributarias formales pendientes de cumplimiento, o que tengan saldos líquidos exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria. En estos casos, la administración tributaria registrará la inhabilitación.
- c) Quienes tengan pendientes obligaciones ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En estos casos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social registrará la inhabilitación.
- d) Quien esté privado, por sentencia firme, del ejercicio de sus derechos civiles.
- e) Las entidades cuyos representantes legales, directivos o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración pública, contra la fe pública, defraudación tributaria, contrabando, defraudación aduanera, o delitos tipificados en las convenciones internacionales que Guatemala sea signataria.

- f) Los dignatarios de la nación, funcionarios públicos, empleados públicos o las autoridades de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta ley, así como sus cónyuges. Esta prohibición aplicará durante el ejercicio del cargo y hasta doce meses después de haber dejado el cargo.
- g) Los parientes dentro de los grados de ley de los dignatarios de la nación, funcionarios públicos, empleados públicos o de las autoridades de las entidades a los que se refiere el artículo 1 de esta ley, cuando los contratos deban celebrarse con las entidades en las que el pariente funja, labore, preste servicios o se encuentre bajo su autoridad. Esta prohibición no aplicará a los cónyuges en virtud de lo establecido en la literal f).
- h) Quienes hayan intervenido en los procedimientos de adquisición pública, particularmente la emisión de dictámenes, determinación de características técnicas y valores referenciales, elaboración de bases, selección y evaluación de ofertas, adjudicación, aprobación, suscripción de contratos y autorización de pagos. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes dentro de los grados de ley.
- i) Quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato anterior al período presidencial o legislatura en curso.

En el ámbito y plazos aplicables a los casos contemplados en este artículo y a la legislación vigente, las personas jurídicas en las que se tenga o haya tenido una participación superior al 5% del capital o patrimonio, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria al proceso de adquisición pública, en cualquiera de los regímenes legales establecidos en esta ley.

Toda entidad del Estado que posea información necesaria para el funcionamiento o actualización de los registros establecidos en la presente ley y su reglamento, incluyendo a la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Registro Nacional de las Personas, el Registro Mercantil, el Instituto Nacional de Estadística y el Organismo Judicial, están obligadas a trasladar plena y oportunamente toda la información, documentos y datos que les requieran las entidades responsables de la actualización y administración de los registros que establece esta ley, particularmente el Ministerio de Finanzas Públicas.

El reglamento establecerá el plazo y procedimientos para la aplicación de las prohibiciones establecidas en este artículo.”

Artículo 35. Se reforma el artículo 81, el cual queda así:

“**Artículo 81. Fraccionamiento.** Se entenderá como fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas.

Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria.

También se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice varias cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es obligatoria.

El funcionario o empleado público que haya autorizado adquisiciones que incurrieron en fraccionamiento será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del acto.”

Artículo 36. Transitorio. Dentro del plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley el Organismo Ejecutivo deberá realizar las reformas pertinentes al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 37. Transitorio: El Ministerio de Finanzas Públicas proveerá los recursos necesarios para el desarrollo progresivo del sistema GUATECOMPRAS con el objeto de implementar las reformas legales contenidas en el presente decreto, para lo cual presentará públicamente un cronograma y plan de desarrollo de actualización del sistema un mes después de haber entrado en vigencia el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 38. Transitorio. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá construir la plataforma electrónica dentro del sistema GUATECOMPRAS para la operación de la subasta electrónica inversa y la oferta electrónica en todas las modalidades de adquisición pública en un plazo no mayor a veinticuatro meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

A partir del inicio de la vigencia de la modalidad de subasta electrónica inversa, y en tanto esté pendiente la implementación plena del Registro General de Adquisiciones del Estado, el Ministerio de Salud Pública podrá solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas que en el sistema GUATECOMPRAS se disponga de un módulo con las herramientas tecnológicas que les permita publicar su registro especial de precalificados para participar en subastas electrónicas inversas de productos medicinales y afines.

Artículo 39. Transitorio. Registro General de Adquisiciones del Estado. En un plazo máximo de treinta y seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Registro General de Adquisiciones del Estado deberá estar en pleno funcionamiento y los registros actuales que regula la Ley de Contrataciones del Estado, serán absorbidos por este registro.

Artículo 40. Transitorio. La institucionalización de la Dirección General de Adquisiciones del Estado será en forma progresiva, de conformidad con el plan de trabajo que incluya como mínimo un

organigrama y recursos financieros, que deberá presentar el Ministerio de Finanzas Públicas dentro del plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Para efectos de cumplimiento de lo establecido en la presente ley, el Ministerio de Finanzas Públicas asignará los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de trabajo y las funciones de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.

Artículo 41. Transitorio. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de esta ley, el Instituto Nacional de Estadística en el plazo de dieciocho meses a partir de la aprobación del reglamento de esta ley, deberá contar con un sistema eficiente, estable y actualizado que satisfaga las necesidades de información que por mandato de esta ley se le requieran.

Artículo 42. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial,

REMÍTASE...

EMITIDO...